

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**PROYECTO DE LEY**

**ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 20 BIS, A LA LEY DE FORTALECIMIENTO  
DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, N.º 8262**

**ALICIA FOURNIER VARGAS  
DIPUTADA**

**EXPEDIENTE N.º 17.839**

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
PARLAMENTARIOS**

## PROYECTO DE LEY

### ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 20 BIS, A LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, N.º 8262

Expediente N.º 17.839

#### ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, N.º 8262, es un cuerpo normativo que promueve un sistema estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, el cual permite el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes, y busca posicionar a este sector, cuyo dinamismo contribuye al proceso de desarrollo económico y social del país, mediante la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la riqueza.

Las micro, pequeña o mediana empresas se determinan, no solo en función de las actividades que realizan, sino que además del valor de las siguientes variables establecidas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a saber:

- a) Personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal.
- b) Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal.
- c) Valor de los activos fijos de la empresa en el último período fiscal (para el sector industrial).
- d) Valor de los activos totales de la empresa en el último período fiscal (para actividades de comercio y servicios).

La Ley N.º 8262 establece en el artículo 20, que para estimular el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), la Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), un programa de compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las Pymes en el monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración Pública, el cual se regirá de conformidad con lo que establece la ley en comentario y su respectivo reglamento.

Atendiendo algunas recomendaciones de grupos productivos de este país, he tomado la decisión de presentar a la corriente legislativa este proyecto de ley, que pretende ser un instrumento, para que la Administración Pública pueda aumentar la adquisición de bienes y servicios de este sector de Pymes.

Resulta relevante indicar que el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), administrado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pretende fomentar y fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, y de las empresas de la economía social económicamente viables y generadoras de puestos de trabajo, para incentivar su creación, consolidación y mantenimiento en un mercado cada vez más competitivo, hace que surja la necesidad de crear normas que estimulen las “compras” por parte del Estado y evitar dejar la balanza inclinada solo para que el productor aprenda cómo “vender” al Estado, sin darle los mecanismos para lograr este objetivo.

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digeypyme) es el instrumento institucional para formular políticas específicas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeños y medianos empresarios, tendiente a fortalecer la competitividad de las pequeñas empresas nacionales por medio de instrumentos de apoyo, pero requiere de insumos legales para estimular la innovación en las empresas.

Con instrumentos que doten a las empresas de una calificación adicional de un 20%, dentro de los procesos contractuales de este país, permitirá que las empresas se planteen objetivos que las conduzcan a la renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores dentro de la actividad económica de nuestro país.

La experiencia de crear instrumentos de calificación adicional, para estimular procesos contractuales de bienes y servicios, ya la encontramos regulada dentro de la normativa costarricense: con la Ley N.º 8660, Fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones (artículo 12, compras verdes) y con la Ley N.º 8839, Ley para la gestión integral de residuos (artículo 29, compras del Estado).

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional, mediante Resolución N.º 11210-2008, ante la consulta facultativa realizada por los diputados y las diputadas a la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, sobre el artículo 12 indicó:

“[...] En cuanto al párrafo 2ª del artículo 12 del proyecto, que le impone al ICE, en la valoración de las licitaciones y compras directas, otorgar un 20% adicional a los oferentes, tal y como se indicó, el párrafo 1ª de ese numeral le concede a ese ente público y sus empresas una simple autorización para efectuar ese tipo de compras, sin que sea una obligación o un imperativo, consecuentemente el párrafo 2ª será aplicable cuando facultativa y optativamente el ICE decide promover una compra de esa naturaleza.”

Considero, que este tipo de insumos permitirá la renovación y la ampliación de la gama de productos y servicios, así como de sus métodos de producción, abastecimiento y distribución de los bienes.

Es importante rescatar que en el Cafta se hizo una reserva en nuestras notas generales al Anexo 9.1.2.b.i, que están en la Sección G de ese Anexo, en donde se indica que el capítulo no aplica a los programas de compras de la Administración Pública para favorecer a las Pymes, por ese lado podría pensarse que el Cafta tiene la previsión para que se desarrollen ese tipo de programas sin violar los compromisos, pues se dejó muy abierto.

Por las razones expuestas, es que presento a la corriente legislativa, a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas este proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA:

**ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 20 BIS, A LA LEY DE FORTALECIMIENTO  
DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, N.º 8262**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Adiciónase un nuevo artículo 20 bis, a la redacción de la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, N.º 8262, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas. El texto dirá:

**“Artículo 20 bis.- Compras del Estado de bienes producidos por las micro y pequeñas empresas**

Autorízase a las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra de bienes y servicios ofrecidos en el mercado nacional, por pequeña y mediana empresa (PYME), que se encuentren amparadas a la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, Ley N.º 8262, de fecha 2 de mayo de 2002, y sus reformas.

Para ello, los bienes y servicios deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública, dicha condición podrá comprobarse por medio de certificaciones y otro mecanismo válido establecido vía reglamento. El director general de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme), definida en el artículo 3 bis de la Ley orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, deberá extender una certificación que ampare a la PYME que se desea acoger a los beneficios de esta Ley.

La valoración de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos pertenecen a pequeña y mediana empresa (PYME). Para el caso de las compras directas deberán incorporarse criterios que promuevan la adquisición de estos bienes producidos por la pequeña y mediana empresa (PYME).

Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compra directa establecerán los criterios técnicos para evaluar las licitaciones, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento que sobre este artículo se emita.”

Rige a partir de su publicación.

Alicia Fournier Vargas  
**DIPUTADA**

**31 de agosto de 2010.**

**NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.**